



AL SERVICIO DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ SOCIAL

MAGISTRADA PONENTE: GLORIA PATRICIA MONTOYA ARBELÁEZ

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,
SALA CIVIL DE DECISIÓN.**

**Medellín, dieciocho de noviembre de dos mil
veinte.**

TRÁMITE: Administrativo disciplinario.

QUEJA: Dr. Sergio de Jesús Gómez Rodríguez.

EN CONTRA DE: Jorge Enrique Duarte Guatibonza
y Gabriel Jaime Torres Villa.

PROCEDENCIA: Presidencia de la Sala Civil.

RADICADO INTERNO: 001/09.

C.U.D.R. 050012203000200900742-00.

PONENTE: Gloria Patricia Montoya Arbeláez.

Practicadas las pruebas pedidas por los disciplinados y las decretadas de oficio por el Tribunal, sería del caso entrar a evaluar el mérito de la investigación para determinar si se archiva ésta o se formula pliego de cargos, de no ser porque se presenta una causal de extinción de la acción disciplinaria, que conlleva a la terminación del trámite administrativo y su archivo, la cual procede a declararse en los siguientes términos:

1.0. ANTECEDENTES

Mediante oficio número 007 de julio 15 de 2009, el DR. SERGIO DE JESÚS GÓMEZ RODRÍGUEZ, puso en conocimiento de la Presidente de la Sala Civil, la irregularidad cometida por los empleados de la Secretaría, dentro del trámite de HABEAS CORPUS, instaurado por el Dr. Francisco Guillermo Monsalve Estrada, en representación del señor Luís Fernando Ramírez Godoy, radicado bajo el número 050012203000200900407-00, por no haberle pasado el expediente a su despacho para conceder la impugnación impetrada por el accionante, sino hasta el día 14 de Julio de 2009, cuando ésta había sido formulada por el apoderado del actor, en el acto de notificación de la sentencia, el ocho de Julio de 2009.

Como la queja no hacía ninguna imputación en particular, sino que se refería a los “Empleados de la Secretaría”, y tampoco era clara la falta cometida, se hizo necesario iniciar una indagación preliminar, dentro de la cual fueron recopiladas las pruebas que se consideraron pertinentes para esclarecer estos aspectos.

Evacuadas las pruebas decretadas en el acto de apertura de indagación preliminar y advirtiéndose que con ella se logró satisfacer los presupuestos formales instituidos por el legislador, el 23 de junio de 2010, se abrió investigación disciplinaria en contra de JORGE ENRIQUE DUARTE GUATIBONZA, quien se desempeñaba como SECRETARIO EN PROPIEDAD DE LA SALA CIVIL, y GABRIEL JAIME TORRES VILLA, quien fungía como ESCRIBIENTE GRADO

NUEVE EN PROVISIONALIDAD DE LA SECRETARIA DE LA SALA CIVIL, por considerar que habían incumplido con los deberes consagrados en los artículos 153 y 154 de la Ley 270 de 1996 y 34 de la Ley 734 de 2002. Fols. 283 y siguientes.

Fueron adunados al trámite disciplinario las hojas de vida de los disciplinados, sus actas de posesión, los manuales de funciones vigentes para la fecha de los hechos, las declaraciones de todos los empleados de la Secretaría de la Sala Civil, las versiones libres de los señores JORGE ENRIQUE DUARTE GUATIBONZA y GABRIEL JAIME TORRES VILLA, además de las pruebas solicitadas por ellos.

Se recaudaron todos los elementos probatorios necesarios para adoptar una decisión de fondo en el plenario, bien fuera archivo o formulación de cargos.

2.0. CONSIDERACIONES.

Estipula el artículo 29 de la Ley 734 de 2002, que es causal de extinción de la acción disciplinaria, la prescripción. Y a renglón seguido, en el inciso segundo del artículo 30, señala:

“La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas....” (Resaltado fuera del texto original).

La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto de la finalidad y el alcance de la figura de la prescripción de la acción disciplinaria, expresando¹:

"(...) La prescripción de la acción es un instituto jurídico liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción (...)."

"(...) La prescripción de la acción es un instituto de orden público, por virtud del cual el Estado cesa su potestad punitiva -ius puniendi- por el cumplimiento del término señalado en la ley. (...)"

"(...) Dentro del proceso disciplinario, la prescripción permite tener certeza de que a partir de su declaratoria la acción disciplinaria iniciada deja de existir. En este sentido, la necesidad de un equilibrio entre el poder sancionador del Estado, y el derecho del servidor público a no permanecer indefinidamente sub iudice y el interés de la administración en ponerle límites a las investigaciones, de manera que no se prolonguen indefinidamente, justifica el necesario acaecimiento de la prescripción de la acción (...)."

Por su parte el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, con ponencia de la DRA. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ, en sentencia de agosto uno de 2018, expediente 25002342000201306148-00, hizo el recuento histórico de la figura para concluir:

"...que la jurisprudencia vigente en materia de prescripción de la acción administrativa disciplinaria, es la contenida en la sentencia

¹ Corte Constitucional, Sentencia C-556 de 2001 del 31 de Mayo de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

de 29 de septiembre de 2009 proferida por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, según la cual, dentro del término de cinco (5) años establecido por el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 –sin la modificación realizada por la Ley 1474 de 2011-, la autoridad disciplinaria competente solo debe proferir y notificar el fallo de primera o única instancia.

En ese orden argumentativo, bajo la vigencia del artículo 30 de la Ley 734 de 2002, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sus dos subsecciones, ha aplicado la tesis decantada por la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación de jurisprudencia de 29 de septiembre de 2009.

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia de 13 de febrero de 2014, en un asunto donde el actor acusaba que se había configurado la prescripción de la acción disciplinaria porque la Procuraduría General de la Nación no notificó el fallo de segunda instancia dentro del término de los 5 años -señalado en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002-, afirmó que la sanción disciplinaria se impone y en consecuencia se interrumpe el término de la prescripción con la expedición y notificación del fallo disciplinario principal y no con la expedición y notificación del fallo que resuelva los recursos de la vía gubernativa.

Esta misma interpretación jurídica del artículo 30 de la Ley 734 de 2002, fue acogida posteriormente por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en sentencia de 28 de julio de 2014, en un asunto de similares características al presente, en el cual el actor presentó como argumento de nulidad la prescripción de la acción disciplinaria argumentando que la Procuraduría General de la Nación profirió y notificó por fuera del término de 5 años el fallo que resolvió un recurso de reposición que interpuso contra el fallo de única instancia; la Sala señaló que dentro del

mencionado plazo, para que no opere la prescripción la autoridad disciplinaria solo debe proferir el acto administrativo principal y no los que resuelven los recursos interpuestos contra este.

En pronunciamiento del 30 de junio de 2016, la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación nuevamente se pronunció en cuanto a la figura de la prescripción de la acción disciplinaria consagrada en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002; en esta oportunidad la Sala reiteró que la autoridad disciplinaria impone la sanción e interrumpe el término de la prescripción con la expedición y notificación del fallo disciplinario principal y no con el que resuelve los recursos interpuestos contra éste

Del anterior análisis legal y jurisprudencial se colige que la prescripción de la acción disciplinaria ha sido abordada por el legislador en diversas oportunidades -Leyes 25 de 1974; 13 de 1984; 200 de 1995 y 734 de 2002- como una institución jurídica para evitar que la investigación se prolongue indefinidamente, en consecuencia, estas normas consagran un plazo máximo para su duración, luego de lo cual se pierde la competencia para sancionar.

Este término de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado se interrumpe cuando la autoridad que adelanta el proceso impone la sanción, esto es cuando expide y notifica el fallo de primera o de única instancia según el caso.

De igual forma, de acuerdo con la norma que actualmente rige la prescripción de la acción disciplinaria –artículo 30 de la Ley 734 de 2002- el término puede ser de 5 o 12 años dependiendo de si se trata de faltas comunes o faltas especial gravedad; la contabilización del plazo es independiente para cada una de las conductas investigadas y el inicio de la contabilización es diferente si se trata de faltas de carácter instantáneo o de carácter

continuado, pues para las primeras comienza desde su consumación mientras que para las segundas desde el último acto de realización.”

De otro lado, de configurarse la prescripción comportaría la extinción de la acción disciplinaria y consecuentemente el archivo de las diligencias por cuanto el funcionario investigador una vez fenecido el término fijado por el legislador no puede proseguir con el trámite administrativo. Así lo determinan los artículos 73 y 210 del Estatuto Disciplinario:

*“En cualquier etapa de la actuación disciplinaria que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará **el archivo definitivo de las diligencias**”*

“ ... ”

*“**El archivo definitivo de la actuación disciplinaria** procederá en cualquier etapa cuando se establezcan plenamente los presupuestos enunciados en el presente Código” (Negrillas y subrayas nuestras).*

3.0. CASO CONCRETO

Conforme a los planteamientos expuestos, la Sala Civil debe determinar

si en el sub examen se satisface el elemento objetivo de los cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de investigación, para que deba terminarse la investigación disciplinaria adelantada en contra de los señores JORGE ENRIQUE DUARTE GUATIBONZA y GABRIEL JAIME TORRES VILLA, por haber operado el fenómeno de la prescripción. Veamos:

Según se pudo constatar en la diligencia de inspección judicial (Fol. 46), practicada al expediente contentivo del HABEAS CORPUS instaurado por el DR. FRANCISCO GUILLERMO MONSALVE ESTRADA, radicado con el número 050012203000200900407-00, éste le fue repartido y pasado por el Secretario de la Sala Civil al DR. SERGIO DE JESÚS GÓMEZ RODRÍGUEZ, **el siete de Julio de 2009, a las 2:45 p.m.**; el Magistrado avocó conocimiento y ordenó inspeccionar el expediente ese mismo día a las 3:30 p.m.; a las 4:30 p.m., practicó inspección judicial a la carpeta del procesado; las notificaciones a los Magistrados accionados y al Ministerio Público, se realizaron también el mismo siete de julio y la notificación al apoderado del accionante, la practicó el empleado GABRIEL JAIME TORRES VILLA, a las 5 p.m., de ese mismo día; **el fallo de primera instancia fue proferido por el Magistrado el ocho de Julio de 2009 a las 10 a.m.**, haciéndose entrega de los oficios de notificación a las partes vinculadas al trámite, suscritos por el Secretario de la Sala Civil, entre las 11:32 a.m. y las 2 p.m.; aparece como última notificación la verificada por el empleado GABRIEL JAIME TORRES VILLA al del DR. FRANCISCO GUILLERMO MONSALVE ESTRADA, el mismo ocho de Julio, sin precisar la hora, quien luego de suscribirla con su puño y letra consigna luego de su firma, la expresión “APELO”. Luego de esta notificación, aparece la constancia suscrita por el Secretario DR.

JORGE ENRIQUE DUARTE GUATIBONZA, **el 14 de Julio de 2009**, mediante la cual ingresa el expediente al despacho del señor Magistrado informándole “.....*que dentro del término legal, se notificó el apoderado del accionante indicando que APELABA la decisión*”. Finalmente la auxiliar judicial del Dr. Gómez Rodríguez, deja constancia de que el expediente fue recibido de la Secretaría, ese mismo 14 de Julio, a las **4:55 p.m.**

En vigencia de la Ley 200 de 1995, el término de prescripción iniciaría a correr a partir del día en que se incumplió con el deber de remitir el expediente contentivo del hábeas corpus al señor Magistrado Ponente para que concediera la apelación interpuesta por el togado judicial que asistía los intereses del actor constitucional.

Sin embargo, con la Ley 734 de 2002, posteriormente modificada por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, éste inicia a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria, que en el caso que nos concita fue emitido el 23 de junio de 2010 (Fol. 283), por lo que la prescripción se configuró el **23 de junio de 2015**, siendo forzoso ordenar la terminación de la investigación y el archivo del expediente.

4.0. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 270 de 1996 y 734 de 2002,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA iniciada en contra del DR. JORGE ENRIQUE DUARTE GUATIBONZA, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.247.727 de Cúcuta, en calidad de SECRETARIO EN PROPIEDAD DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, conforme a la queja elevada por el DR. SERGIO DE JESÚS GÓMEZ RODRÍGUEZ.

SEGUNDO: DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA en contra del DR. GABRIEL JAIME TORRES VILLA, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.100.530 de Medellín, en calidad de ESCRIBIENTE GRADO 09 EN PROVISIONALIDAD, DE LA SECRETARÍA DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, conforme a la queja elevada por el DR. SERGIO DE JESÚS GÓMEZ RODRÍGUEZ.

TERCERO: En consecuencia, se ordena **LA TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE**, tramitado en contra de JORGE ENRIQUE DUARTE GUATIBONZA Y GABRIEL JAIME TORRES VILLA, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: Por la Secretaría establézcase comunicación con los disciplinados para que manifiesten si autorizan la notificación por correo electrónico, de lo cual deberá dejarse constancia en el

expediente. Sino se autoriza, se remitirá por correo certificado copia de esta a los empleados investigados, efectuando trazabilidad a la comunicación para tener certeza de su recepción.

QUINTO: En virtud de las normas de excepción por la pandemia, la presente decisión se suscribe digitalmente por el Presidente de la Sala Civil y se le incorporará copia del acta de la sesión en la que fue aprobada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
Presidente Sala Civil

C.U.D.R. 050012203000200900742-00.

000-2016-00072-00, es en contra de empleados de Secretaría. Sometido a consideración es aprobado por unanimidad

3.- Discusión de ponencias presentadas por la Magistrada Dra. Gloria Patricia Montoya Arbeláez, dentro de los siguientes procesos disciplinarios:

-05001-22-03-000-2009-00742-00 adelantado en contra de Jorge Enrique Duarte Guatibonza.

-05001-22-03-000-2016-00072-00 indagación preliminar adelantada en contra de empleados de Secretaría.

Se le concedió el uso de la palabra a la dra. Gloria Patricia Montoya Arbeláez, ponente, quien presentó sus proyectos, ambos fueron sometidos a consideración y votación siendo aprobados por unanimidad. Se deja constancia que la Dra Piedad Cecilia Vélez Gaviria frente al disciplinario 05001 22 03 000 2016 00072 00, votó a favor, pero con aclaración.

Frente al proceso disciplinario con radicado 05001 22 03 000 2016 00072, se realizaron las siguientes intervenciones:

La dra. Martha Cecilia Lema Villada expresa que echa de menos en la providencia presentada por la Dra. Gloria Patricia, los nombres de los empleados que estaban en ese momento en la Secretaría. Indica que le parece importante involucrar los nombres, porque es una decisión que podrá hacer tránsito a cosa juzgada, o que define una situación de indagación preliminar.

La dra. Gloria Patricia Montoya Arbeláez explica que en su proyecto no puede decir los nombres de los empleados, porque la indagación era para determinar quién o quiénes eran los posibles autores o partícipes, y que para poder abrir la investigación, se tenía que individualizar al empleado. Aclara que la decisión no hace tránsito a cosa juzgada porque el archivo de una indagación preliminar no implica que no se pueda volver a instaurar los hechos si aparecen nuevos elementos probatorios que den cuenta de quiénes fueron los autores. Reitera que se tenía que determinar quién era el empleado responsable para abrir la investigación, y que por tratarse de un proceso de indagación preliminar se debía hacer de forma

indeterminada “empleados de secretaría”.

La dra. Piedad Cecilia Vélez Gaviria manifiesta estar de acuerdo en términos generales con la ponencia, y dice tener una inquietud, cuando en la ponencia se dice que, “no estaba asignado en el manual de funciones específicamente a ningún empleado, pues aunque se hubiera logrado establecer qué empleado abrió el correo y conoció esa situación, de todas maneras, no se habría cometido falta”. Reitera estar de acuerdo con la ponencia, en tanto concluye que no se pudo definir si se cometió o no una falta disciplinaria porque es claro que la Corte no hizo la notificación en debida forma, y por eso finalmente, el asunto no trascendió. Afirma que, si se hubiera podido definir la comisión de una falta disciplinaria, aunque no estuviera asignada en el manual de funciones, y si se hubiera establecido qué empleado tuvo acceso al correo, la falta se hubiera podido estructurar, y dar curso a una investigación. Reitera estar de acuerdo con la ponencia porque deja claro que no se pudo definir la falta disciplinaria. Por último, le sugiere a la dra. Gloria Patricia, pensar en eliminar esa pequeña parte de la ponencia.

La dra. Gloria Patricia Montoya Arbeláez dice que inicialmente ella pensó lo que está planteando la dra. Piedad Cecilia, pero en los manuales de funciones siempre se ha consagrado al final “las funciones que expresamente el secretario le asigne”. Afirma que el solo hecho de abrir un correo no implica responsabilidad disciplinaria para el empleado que lo abrió, a menos que él tuviera la responsabilidad de dirigir ese correo al Magistrado que le correspondiera. Insiste en que el solo hecho de abrir un correo no implica responsabilidad disciplinaria.

La dra. Piedad Cecilia Vélez Gaviria manifiesta que hará una aclaración en ese punto.

Siendo las 10.46 a.m. se da por terminada la sesión.

JOSÉ OMAR BOHÓQUEZ VIDUEÑAS

Presidente de la Sala